

CAUSA N° 670/2020, CARATULADA “H., K. A. S/INF. ART. 303 DEL C.P.”. J.N.P.E. N° 4. SEC. N° 7
(EXPEDIENTE N° CPE 670/2020/CA1. ORDEN N° 30796. SALA “B”).

//nos Aires, de julio de 2022.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto, con fecha 22/12/2021, por la señora representante del Ministerio Público Fiscal ante el juzgado de la instancia anterior, contra la resolución dictada en el presente expediente con fecha 20/12/2021, en cuanto por aquélla se dictó un auto de sobreseimiento de K. A. H.

La presentación de fecha 2/2/2022, por la cual el señor Fiscal General mantuvo el recurso de apelación.

El memorial presentado con fecha 24/2/2022, por el cual el señor representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia informó en los términos del art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, las presentes actuaciones tuvieron inicio con motivo de un procedimiento policial desarrollado en la vía pública con fecha 22/09/2020, por el cual se detuvo la circulación de un vehículo marca Volkswagen, modelo “Ventus”, dominio AD132XI, cuyo conductor resultó ser K. A. H. En tal oportunidad, se advirtió que el nombrado llevaba dinero en efectivo en una campera sobre el asiento del acompañante, con relación al cual aquél habría referido: “...tengo casi medio millón y estaba yendo a la cueva de un amigo a comprar dólares...”.

Producto de la requisa practicada sobre K. A. H. y sobre el vehículo en el que éste se trasladaba se determinó que el nombrado llevaba consigo la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos (\$450.000).

A partir de estas circunstancias, la fiscalía que actúa ante la instancia previa, a quien le fue delegada la dirección de la instrucción en los términos del art. 196 del C.P.P.N., delimitó el objeto procesal de estas actuaciones en la posible existencia de un posible suceso delictivo subsumible



en las previsiones del art. 303 del Código Penal, dirigiendo la imputación a K. A. H. (conf. fs. 48/50).

2º) Que, por la resolución de fecha 20/12/2021, el señor juez a cargo del juzgado “a quo” dispuso el sobreseimiento total en las actuaciones con relación a K. A. H.

Para decidir de esta forma, el señor magistrado a cargo del juzgado de la instancia previa argumentó que, en el caso, no se encuentran verificados los elementos necesarios para tener por acreditado el estado de sospecha con relación a K. A. H.

En ese sentido, argumentó que el antecedente penal que registra el nombrado no habilitaría a presumir un origen ilícito al dinero secuestrado y que, además, tampoco se encuentra acreditado que aquél fuera a ser introducido en el mercado a través de alguna operación que le diera origen lícito.

Por lo tanto, y considerando que la señora representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior consideró que no existen otras medidas de prueba pendientes de producción, concluyó el señor juez “a quo” que correspondía el dictado de un auto remisorio.

3º) Que, por el recurso de apelación interpuesto por la señora representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior, esa parte se agravió de la resolución referida por la consideración anterior por entender que los elementos probatorios que fueron recolectados durante la instrucción resultarían suficientes para tener por acreditado el estado de sospecha previsto por el art. 294 del C.P.P.N. respecto de K. A. H. y que, por lo tanto, la resolución apelada no se ajusta a derecho debido a que se contrapone con los elementos de prueba recabados durante la instrucción.

En ese sentido, en relación con K. A. H., afirmó la señora fiscal que habría quedado verificada la incapacidad económica del nombrado, que aquél no tendría una actividad lícita registrada, y que la suma secuestrada no estaba declarada ante el fisco nacional. Argumentó, además, que K. A. H. ha sido condenado, con fecha 21/08/2020, como partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y que uno de los teléfonos que llevaba consigo al momento del procedimiento que dio inicio a las actuaciones se encontraba denunciado como robado, circunstancias por las que,



sostuvo, se “...acrecienta la teoría de que el investigado se encontraría inmerso en actividades ilegales que podrían resultar la fuente generadora del dinero secuestrado...”.

4º) Que, por la compulsa de las presentes actuaciones se advierte que, contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, las constancias probatorias incorporadas a la causa no resultan suficientes para entender acreditada en el caso la concurrencia de los elementos típicos exigidos por la figura legal en la cual se encuadró el hecho investigado.

En efecto, por el art. 303, inc. 3, del Código Penal, en el que de acuerdo con lo argumentado por el Ministerio Público Fiscal correspondería encuadrar la conducta atribuida a K. A. H. en estas actuaciones, se prevé la aplicación de una pena de prisión para quien “...recibiére dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les de la apariencia posible de un origen lícito...”.

Por la descripción típica transcrita precedentemente, se advierte que el delito contenido por aquélla exige para su configuración, además de comprobar la realización objetiva de la acción típica, consistente en “recibir” los bienes provenientes de un ilícito penal, la presencia de un elemento subjetivo específico consistente en la finalidad del autor de recibirlos para hacer aplicar aquellos bienes a una operación de las previstas por el art. 303, inc. 1, del Código Penal.

5º) Que, por lo expresado en la consideración anterior se advierte que, además de no haberse acreditado siquiera la posible procedencia ilícita del dinero secuestrado, la aplicación en el caso “sub examine” de la figura prevista por el art. 303, inc. 3, del Código Penal, requiere la verificación, cuanto menos de manera indiciaria, en orden a la existencia de una ultraintencionalidad en la conducta objetiva atribuida a K. A. H., consistente en la motivación o el propósito del nombrado de emplear el dinero de origen supuestamente ilícito que habría recibido para realizar alguna de las acciones previstas por el art. 303, inc. 1, del Código Penal (convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado), con la consecuencia posible de que el mismo adquiera apariencia de un origen lícito.

Sin embargo, en el caso, resulta acorde con las constancias incorporadas en el expediente lo expresado por el señor magistrado a cargo del juzgado de la instancia anterior en cuanto a que no se encuentra acreditado ni siquiera indiciariamente, que el dinero en cuestión tuviera como destino ser introducido en el mercado a través de alguna operación que le diera apariencia de origen lícito, y que de acuerdo con lo dictaminado por el señor representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior no se advierten medidas de prueba pendientes de producción por las que pudiera eventualmente acreditarse el extremo subjetivo referido por las consideraciones precedentes, por lo que la solución remisorio adoptada por el juzgado de la instancia anterior resulta ajustada a derecho y a las constancias incorporadas a la encuesta, por lo que debe ser confirmada.

El señor Juez de Cámara doctor Roberto Enrique Hornos agregó:

6°) Que, por otra parte, y no por cierto menos importante, en el presente caso, por el análisis de las circunstancias volcadas en el acta que da cuenta del procedimiento que dio origen a las presentes actuaciones, se advierte que los funcionarios policiales que intervinieron en el mismo, no habrían actuado en el marco de las facultades preventivas conferidas por los arts. 183, 184 y 230 bis del C.P.P.N., pues en las circunstancias del caso no se verifica la concurrencia de circunstancias que, objetiva y razonablemente, hayan tenido entidad suficiente para sospechar la posible comisión de hecho ilícito alguno, así como tampoco para presumir que el imputado ocultase elementos provenientes o destinados a la comisión de un delito en los términos del art. 230 bis del C.P.P.N y que, en consecuencia, los haya habilitado a actuar del modo en que lo hicieron.

En efecto, no sólo no llega a comprenderse de manera acabada de qué modo el personal policial pudo advertir “...a simple vista...” el dinero que, conforme surge del acta, se hallaba ubicado en los bolsillos de una campera que se encontraba sobre el asiento del acompañante en el interior del vehículo en el que se trasladaba K. A. H., sino que, en tanto la tenencia de dinero en efectivo no evidencia necesariamente la comisión presunta de un hecho ilícito, no se advierte que estas circunstancias objetivas constituyeran en el caso motivos



suficientes para sospechar la posible comisión de un ilícito o que el imputado portara elementos probablemente provenientes o destinados a cometer un delito, de modo que se habilitara la identificación y la inspección del nombrado, de sus pertenencias y del vehículo en el que aquel se movilizaba, prescindiendo de una orden judicial (conf. en ese sentido: Fallos 321:2947 y causa N° CPE 718/2020/1/CA1, res. de 11/5/20222, Reg. Interno N° 193/22 de esta Sala “B”).

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. CONFIRMAR la resolución apelada.

II. SIN COSTAS (art. 530 y 532 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

